

Santiago, doce de julio de dos mil veintiuno.

**Vistos:**

El Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de uno de abril de dos mil veintiuno, en los antecedentes RUC 1900874972-0 y RIT 20-2021, condenó a Bryan Alejandro Contreras Huerta a la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo, multa de cuarenta unidades tributarias mensuales, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito de tráfico de estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3 en relación con el artículo 1 de la Ley N° 20.000, perpetrado el día 14 de agosto de 2019, en la comuna de La Florida.

En contra de esa decisión, la defensa del acusado interpuso recurso de nulidad, el que se conoció en la audiencia pública de veintidós de junio pasado, como da cuenta el acta que se levantó con la misma fecha.

**Considerando:**

**Primero:** Que el recurso esgrime como única causal la contemplada en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, por cuanto en la tramitación del juicio y en el pronunciamiento de la sentencia se habrían infringido sustancialmente los derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

Expresa que se vulneró la garantía del debido proceso, el derecho a la libertad personal y a la libertad ambulatoria, consagrados tanto a nivel constitucional como convencional, atentando así en contra de lo dispuesto en los



artículos 19 N° 3 inciso sexto y 19 N° 7 letras a), b) y c) de la Constitución Política de la República; 7 y 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y; 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por cuanto los funcionarios policiales aprehensores relatan que la sospecha que justificó su actuar se fundó en que el acusado manipulaba en esos momentos un celular con carcasa “brillante” y que en una de sus manos tuviera una cartera, ambas cosas, según señalaron, correspondientes a objetos propios de una mujer y no de un hombre, fue lo que los llevó a la realización del control de identidad. Sin embargo, y pese a que durante la declaración de sus testimonios se sostuvo que el carácter del control fue preventivo, es posible evidenciar que desde un comienzo e incluso previo a verificar la identidad de los sujetos, el fin del control era de carácter investigativo, lo cual consta en la declaración del funcionario Corales Tobar, quien registro la cartera que llevaba su representado, en cuyo interior se encontraron dos envoltorios en forma de ladrillo, cubiertos con alusa transparente y una huincha negra, los que, en base a su experiencia y años de servicio, asociaron a droga.

Señala que estas diligencias infringieron sustancialmente las garantías de su representado y viciaron de nulidad las actuaciones realizadas por los funcionarios aprehensores, contaminando de ilicitud la prueba de cargo rendida durante el juicio, toda vez que el control desplegado por los funcionarios policiales fue de carácter investigativo, pues el indicio en el que se basaron los funcionarios policiales para realizar el control de identidad no era suficiente, sino que se fundamentó en una serie de estereotipos y apreciaciones de carácter subjetivo.



Indica que trasladaron a su representado y a la mujer que lo acompañaba a la unidad policial, atendida la peligrosidad del sector en el que se encontraban, y solo en ese lugar se verificaron sus identidades.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, se anule el juicio y la sentencia, y se excluye la prueba ofrecida por el Ministerio Público que individualiza.

**Segundo:** Que de conformidad al artículo 359 del Código Procesal Penal, la recurrente rindió prueba de audio en la audiencia celebrada ante esta Corte, consistente en la reproducción de diversos pasajes de los testimonios prestados por los policías que participaron en el procedimiento, quienes se refirieron al procedimiento de control de identidad.

**Tercero:** Que la sentencia impugnada, en su motivo séptimo, tuvo por acreditado los siguientes hechos:

*“El 14 de agosto de 2019, aproximadamente a las 22:00 horas, personal de Carabineros de Chile, realizaban un patrullaje preventivo por Avenida Punta Arenas de la Comuna de La Florida. Al llegar a calle Leonardo Latorre, observan a BRYAN ALEJANDRO CONTRERAS HUERTA y CAMILA ANTONELLA MANCILLA LAZO, manipulando una cartera de mujer, la que estaba en las manos de Contreras Huerta, y un teléfono celular. Luego, al percatarse de la presencia policial BRYAN ALEJANDRO CONTRERAS HUERTA, le pasa la cartera a la mujer, quien al momento de ser controlada por carabineros la arroja al suelo. Acto seguido, durante la revisión de la cartera se encontró en su interior dos envoltorios de cocaína clorhidrato, uno de ellos con un peso bruto de 1 kilo y 128 gramos al 96% de pureza y otro con un peso bruto de 1 kilo y 137 gramos, al 94% de pureza*



*y cuyo peso neto bordea los 2 kilogramos neto, por lo que se procedió a la detención de ambos.*

*Por último, al registro de CONTRERAS HUERTA se le encontró la suma de \$ 10.000 pesos, en billetes de \$1.000 pesos, producto de la venta de drogas y un celular marca Huawei”.*

Los hechos descritos fueron calificados como constitutivos del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, previsto y sancionado en los artículos 3° y 1° de la Ley N° 20.000.

**Cuarto:** Que, de acuerdo a lo expuesto en el recurso de nulidad, la infracción denunciada se produjo dado que la detención del acusado y la recolección de la evidencia incriminatoria habría sido ejecutada fuera del ámbito de las atribuciones de la policía que intervino, al haber actuado sin que existiese indicio alguno que le permitiera realizar acciones restrictivas de la libertad de éste.

Ha sostenido esta Corte Suprema que el Código Procesal Penal regula las funciones de la policía en relación a la investigación de hechos punibles, reconociéndole grados de autonomía en lo que dice relación con la posibilidad de llevar a cabo diligencias o actuaciones que tiendan al éxito de la investigación.

Se desprende de lo anterior que la actuación de la policía, por regla general, se encuentra sujeta a la dirección y responsabilidad de los representantes del Ministerio Público o de los jueces (artículo 80 del Código Procesal Penal) y en esa condición de excepcionalidad ha de leerse el artículo 83 del Código del ramo.

Los artículos 85 y 86 regulan el procedimiento de control de identidad, estableciendo el primero de ellos, en lo que interesa: *“Control de identidad. Los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 deberán, además, sin orden*



*previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en los casos fundados, en que, según las circunstancias, estimaren que exista algún indicio de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiese suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; o en el caso de la persona que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad. El funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos”.*

La norma transcrita permite o faculta a los funcionarios policiales para solicitar la identificación de cualquier persona, siempre que, según las circunstancias, estimaren que existe algún indicio que la persona a controlar se dispusiere a cometer un crimen, simple delito o falta, además de otros casos que señala la disposición.

Por su parte, el artículo 12 de la Ley 20.931 establece que: *“En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales indicados en el artículo 83 del mismo Código podrán verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público, por cualquier medio de identificación, tal como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta estudiantil o utilizando, el funcionario policial o la persona requerida, cualquier dispositivo tecnológico idóneo para tal efecto, debiendo siempre otorgarse las facilidades necesarias para su adecuado cumplimiento...”.*



**Quinto:** Que cabe consignar que el indicio que justificó la decisión de los funcionarios policiales para llevar a cabo la diligencia cuestionada por la defensa, se produce cuando ellos se aproximan al acusado para efectuarle un control de identidad preventivo y éste al advertir su presencia entrega una cartera que portaba a una mujer que se encontraba a su lado y ella, por su parte, la lanza al suelo.

De esa manera, si bien en un inicio los funcionarios se aprestaban a efectuar un control de identidad preventivo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 12 de la Ley 20.931, al cumplirse los presupuestos legales para ello, esto es, que los sujetos se encontraban en la vía pública, y que al menos el acusado era mayor de edad, dicha situación mutó al configurarse un indicio objetivo que los habilitó a actuar conforme el artículo 85 del Código Procesal Penal, esto es, que el imputado entregara la cartera a la mujer que estaba a su lado, quien la lanza al suelo al ver que los funcionarios policiales se acercaban.

**Sexto:** Que, en atención a lo antes concluido, los funcionarios policiales se encontraban entonces facultados para el registro de sus vestimentas, labor por la cual se le encontró al interior de la cartera dos envoltorios de cocaína clorhidrato, uno de ellos con un peso bruto de 1 kilo y 128 gramos, con 96% de pureza y otro con un peso bruto de 1 kilo y 137 gramos, con 94% de pureza, lo que configura la causal de flagrancia de la letra a) del artículo 130 del Código Procesal Penal, esto es, *“El que actualmente se encontrare cometiendo el delito”*, lo que en definitiva justificaba su detención.

**Séptimo:** Que corolario de todo lo que se ha venido razonando, es que no se han vulnerado los derechos al debido proceso, a la intimidad y a la libertad



personal del imputado Bryan Alejandro Contreras Huerta, como se acusa por el recurrente, motivo por el cual no se configura la causal de nulidad de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal invocada en el arbitrio, lo que conduce a que ésta deba ser desestimada.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 372 y 373 letra a) del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la defensa del acusado Bryan Alejandro Contreras Huerta, contra la sentencia dictada con fecha uno de abril del año en curso, por el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago en la causa RUC N° 1900874972-0 y RIT N° 20-2021, y el juicio oral que le antecedió, los que, por ende, no son nulos.

**Acordada con el voto en contra de los Ministros Sres. Brito y Llanos**, quienes fueron del parecer de acoger el recurso de nulidad, debido a que, en concepto de los disidentes, las circunstancias fácticas ya relacionadas, y que guardan relación a que un hombre portaba una carcasa de teléfono brillante y una cartera, elementos que no llevan consigo hombres, según lo aseverado por los funcionarios policiales, en modo alguno pudieron resultar idóneas para revelar el porte de la sustancia estupefaciente, pues se trató de un hecho que logró ser percibido solo a resultas de un control injustificado, lo cual quedó de manifiesto debido a que, uno de los funcionarios policiales solo pudo advertir la existencia de los envoltorios que contenían la sustancia estupefaciente durante el control de identidad, precisamente al registrar la cartera, la que fue lanzada al suelo, luego de iniciarse la actuación policial y no antes de ésta.

De otro modo, se daría cabida como motivo para este control a los meros prejuicios y suposiciones de los funcionarios policiales, quienes podrían restringir



la libertad de terceros, simplemente por la desconfianza o sospecha que les genera que un hombre que está en la vía pública porte elementos, como una cartera y una carcasa de teléfono brillante, que usualmente son utilizados por mujeres, o cualquier otro motivo que pueda calificarse como un mero prejuicio y, por ende, discriminatorio, motivos que no pueden en caso alguno fundar la actuación de agentes del Estado desde que ello vulneraría la garantía de igualdad ante la ley reconocida en el artículo 19, N° 2 de nuestra Carta Fundamental.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante Sra. Tavolari y de la disidencia sus autores.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 27.060-2021

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., el Ministro Suplente Sr. Jorge Zepeda A., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. No firma el Ministro Sr. Brito y la Abogada Integrante Sra. Tavolari, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con licencia médica y ausente, respectivamente.







En Santiago, a doce de julio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

